

## ¿A DONDE VA LA UNIVERSIDAD?

---

Salvador Palau del Río

---

### I.- LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA INCERTIDUMBRE

Si los años 80 fueron considerados como la década perdida para Latinoamérica —y así lo corroboran los índices socio-económicos— los 90, además de prolongar ese pesimismo, parecieran estar marcados por el signo de la incertidumbre. Existe consenso en señalar ese sentimiento de duda hacia el futuro como la característica dominante en el presente decenio, condición que afecta —aunque con distintas connotaciones— tanto al Tercer Mundo como a los países industrializados.

El derrumbe de las utopías socialistas —aunque no su muerte— unido a la escasa credibilidad que ofrecen las actuales propuestas neoliberales —especialmente al ser aplicadas a los países subdesarrollados— configuran tal estado de confusión como reflejo del desconcierto ideológico existente. La anunciada recesión económica, que también se cierne sobre las naciones industrializadas, completaría el ambiente de malestar generalizado y de rechazo al dogma.

Una de las principales conclusiones de la reciente Reunión Internacional de la UNESCO celebrada en Caracas en 1991, «Reflexiones sobre los roles de la Educación Superior, El caso de América Latina y del Caribe», fue precisamente, el reconocer que estamos en una «zona de incertidumbre» caracterizada por la indefinición del panorama futuro y del perfil que está adquiriendo el «nuevo orden mundial». Pese a que se desea un cambio económico, político y social, y una mayor apertura entre los países, también se desconfía de ese «reordenamiento global» en el cual, soterradamente, afloran los intereses nacionales de las grandes potencias y las facetas más negativas de la esencia humana.

Numerosas publicaciones reflejan el ambiente de duda que domina las postrimerías de fin de siglo. Diversas reseñas bibliográficas europeas así lo confirman: «Il dubbio» (Luciano di Frescenzo), «Il uomo senza certezza» (Pandstraller), «il tempo senza certezza» (Boggia). Igualmente, el último libro de Thierry Breton, «Le fin des illusions», o el de Baudrillard «L'illusion de la fin», expresan ese mismo sentimiento de incertidumbre. Los 90 carecen de futuro porque carecen de porvenir, parece ser el mensaje de estos autores. Condensando la idea, en «El cansancio de Occidente», Rafael Argullol y Eugenio Trías intentan demostrar que el modelo occidental luce ya exhausto y sin perspectivas. (1) También a nivel local, Uslar Pietri percibe el panorama actual como «El gran desconcierto», (2) y Lombardi nos habla de «Tiempos de incertidumbre». (3)

Esta corriente del pensamiento, nos trae recuerdos de los movimientos sociales de los años 60, cuando se cuestionaba y hostilizaba todo lo establecido. Si entonces se promovía la contracultura, la antiescuela, la antifilosofía o el antipoder, ahora pareciera iniciarse una rebelión contra la «razón económica» imperante, como expresión de la excitación capitalista actual, o contra las formas de vida inherentes al mensaje neoliberal en su expresión más extrema (consumismo, individualismo, materialis-

mo, pragmatismo, etc.) ¿Será que se está gestando una nueva versión del antistatus que nos oxigene de la presión economicista? Esperamos que así sea.

Aunque esta duda existencial tiene marcadas diferencias entre los países desarrollados y aquellos del Tercer Mundo que están siendo neoliberalizados, los puntos de contacto son también significativos, especialmente en cuanto a las contradicciones ideológicas y sociales que los envuelve a todos. Dentro de ese juego mundial, el país intenta superar tal confusión y valorar los esquemas económicos en la búsqueda de algunas alternativas posibles.

Por su lado, la Universidad se encuentra igualmente afectada por la imprecisión y por el vacío teleológico reinante. Los puntos de referencia que le ofrece la sociedad a la cual debe integrarse y servir, así como la insatisfacción que produce el modelo socio-económico que se pretende vender al país, plantean serios dilemas a la institución universitaria que impiden la clara proyección de sus fines y funciones hacia el ya cercano siglo XXI.

Tenemos consciencia de que debemos mejorar los niveles de calidad y de rendimiento, que es necesario establecer mecanismos más eficaces de evaluación institucional en todo el ámbito académico-administrativo, y que se deben formar buenos profesionales. Pero no hay claridad en cuanto a qué tipo de carrera o de formación será la más adecuada al país, o respecto al modelo económico y social que nos corresponde edificar en este período de transición.

Sobre ello, también se ha denunciado el riesgo de adoptar ciertos parámetros económicos que pudieran alejar a las universidades de sus auténticas misiones, así como la influencia nefasta que ejercería el paradigma neoliberal si es asumido en su expresión más exacerbada. El peligro de poner la institución al servicio de una determinada demanda económica, o de desvirtuar las

actividades de autofinanciamiento al ser únicamente hacia fines lucrativos —en desmedro de la investigación— son, asimismo, algunas de las reflexiones actuales.

Aunque en Venezuela, dadas las inestables condiciones políticas y económicas inherentes a un país en desarrollo, sería difícil concebir una excesiva funcionalización de la Universidad con la economía dominante, a semejanza de los países industrializados, ello no la excluye del riesgo de recibir las influencias negativas ya mencionadas.

Pero la idea de esa deseada integración universidad-sociedad quedaría incompleta si la asumimos solamente como una adecuación de la institución al aparato productivo moderno sin considerar globalmente la realidad del país. En una sociedad como la venezolana, donde conviven dos ámbitos socio-económicos muy diferenciados —un sector moderno y desarrollado, en contraste con el sector tradicional en el que se entremezclan la economía informal con la marginalidad— la eficiencia de las universidades debería medirse más por su pertinencia a esa sociedad dramáticamente dual, que por su semejanza a los niveles académicos de las universidades del mundo desarrollado. Nuestro enfoque metodológico para diagnosticar y proyectar las misiones universitarias no puede, por lo tanto, obviar esta clara realidad.

Ciertamente que la enseñanza superior debe innovarse y modernizarse constantemente; pero quizás sería una absurda ironía diseñar la Universidad para el siglo XXI con objetivos similares a los de las instituciones universitarias de las naciones industrializadas, dándole prioridad a las formaciones profesionales de vanguardia, pero ignorando que más de la mitad del país está anclado en el pasado remoto. No debería olvidarse al respecto, que el esfuerzo modernizador emprendido en los años 70, a imagen de los modelos euro-norteamericanos, ha mostrado hasta el presente serias limitaciones para propiciar un desarrollo integral, y

que la gran masa de profesionales universitarios —que ya se acerca al millón— y se siente impotente ante la crisis actual. Las huellas de esta experiencia, parecen, pues, advertirnos sobre la necesidad de buscar unas vías académicas quizá más modestas, pero acordes a las actuales condiciones nacionales, sin que ello implique, por supuesto, descartar las actividades docentes de avanzada o la investigación de punta.

Sin embargo, pese a esos antecedentes recientes que nos llaman a la reflexión, y a la mayor madurez actual de la Universidad, la tentación de retomar el camino de la megalomanía, del gigantismo imitativo o de un snobismo estéril —tal como ocurrió en esa década señalada, tanto en la economía como en la Educación Superior— es un peligro que de nuevo se cierne sobre la institución. Aunque, como dijimos, la búsqueda de progreso y de formas más avanzadas y sedimentadas debe ser una actitud constante, nuestro esfuerzo académico no puede olvidar la existencia de unas condiciones sociales y económicas, con muy distintos niveles de evolución, a las cuales debemos también servir. Hacer lo contrario significaría trasladar al campo educativo la tan criticada política económica de reciente huella, que magnifica los macroindicadores pero ignora la sociedad para la cual trabaja.

En su gama de funciones —investigación, docencia, extensión y búsqueda de autarquía— dirigidas a producir, aplicar y difundir el conocimiento en su más elevado nivel, la Universidad debe presentar propuestas que contribuyan a despejar ese estado de confusión, pero manteniéndose atenta a las presiones utilitaristas que hoy priman o a la adopción mecánica de unos roles económicos aún no bien definidos. Tal independencia de criterios y de opciones, lógicamente, se torna hoy más difícil para la institución frente a los valores que prevalecen en la sociedad actual, impregnados en un pragmatismo absorbente y sujetos al dictamen económico como prioridad absoluta. Sin embargo, pese a tales factores negativos que pudieran desvirtuar sus misiones

fundamentales, y a las constantes presiones financieras a que está sometida la institución universitaria, creemos que está ya descifrando con acierto el sentido de su destino frente al cambio y a la innovación. El creciente acento puesto en la investigación científica, en la búsqueda de tecnologías alternas, y en un mayor acercamiento a la sociedad y a sus problemas, así parece demostrarlo.

## **II. LA UNIVERSIDAD ANTE LAS NUEVAS RELACIONES ECONÓMICO-SOCIALES**

Si en cierta época la Universidad se mantuvo relativamente aislada de su entorno social y económico, hoy, además de una progresiva incorporación a la problemática del medio circundante más cercano, la institución no escapa, junto al resto del país, a esa mundialización tan alabada por algunos, pero de la cual, al parecer, somos hasta ahora más víctimas que beneficiarios. Bajo la consigna de «no perder el tren del progreso», pareciera más bien que estamos tomando un tren expreso equivocado, con billete de tercera y con destino desconocido.

Pese a las expectativas despertadas por las actuales reformas y por la acentuación de la economía de mercado, los resultados iniciales no auguran buenas perspectivas para un desarrollo sostenido, integral y equitativo en el país. Aún más, los indicadores que proyecta esta fase de cuatro años de reacomodo del país a la globalización económica orquestada por el gran mundo, reflejan tanto la perpetuación de la dependencia petrolera —típica de una estructura del subdesarrollo— como el tradicional estancamiento de los sectores industrial y agrícola. (4) El tan discutido déficit fiscal (próximo ya a los 300.000 millones de bolívares) no sería, en el fondo sino el resultado de la estrepitosa caída de los precios del petróleo durante el presente año 1993, y que se prolongará al 94.

Aparte de los errores atribuibles a los gobernantes de turno, es evidente que el modelo económico asumido hasta el presente ha respondido más a los dictámenes internacionales —especialmente del Fondo Monetario Internacional— que a la voluntad interna del país. Dentro de esta «nueva» distribución de roles, el papel complementario que le toca jugar a Venezuela, demuestra, una vez más, como las naciones «en desarrollo» no son sino sumisas comparsas en esa economía global regida por las grandes potencias y sus entes bancarios.

Esquemmatizando el actual panorama mundial, diríamos que, por un lado, tenemos un sistema económico liberal —con falsas apariencias de ortodoxia— representado por el capitalismo transnacional de las naciones industrializadas y, por otro lado, el capitalismo del subdesarrollo, donde los proyectos neoliberales asumen una dimensión de accesoriedad y dependencia. Mientras que al esquema económico tercermundista se le constriñe a cumplir ingenuamente con la ortodoxia del mercado, según los dictámenes del FMI, y a paliar los déficit estructurales del mundo superdesarrollado, éste maneja sus propias reglas de acuerdo a sus intereses específicos coyunturales.

Numerosos estudios corroboran la existencia de ese doble juego. Al respecto, un informe reciente de la ONU (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), (5) revela, por ejemplo, que el 83 por ciento de los países industrializados aplica políticas más proteccionistas que hace 10 años, en contradicción abierta tanto con la esencia del ideal del mercado como con las normas económicas impuestas al Tercer Mundo. Este mismo informe también señala, en cuanto a la deuda externa, que las tasas de interés real que pagan los países en desarrollo son cuatro veces mayores que las pagadas por los industrializados. Además, el mundo subdesarrollado pierde más de 500.000 millones de dólares anuales a causa de las restricciones impuestas en el mercado mundial.

Sobre esta «neorepartición», suele hablarse eufemísticamente de dos tipos de países: los prácticos y los ingenuos. Los primeros —países desarrollados— con sutiles formas de neoproteccionismo (medidas ecológicas, reglamentos fitosanitarios, normas anti-dumping, sistemas preferenciales, etc.) impiden el acceso de productos de los países en vías de desarrollo, mientras, estos últimos, abren sus mercados inocentemente para complacencia de los primeros.

Tal sistema de relaciones asimétricas, parece mostrar, en síntesis, que la historia neocolonialista sigue aún vigente, pues perpetúa ese vínculo capitalista-dependiente ya existente en el país, aunque ahora con una imagen distinta. So pretexto de la necesidad de mantener un crecimiento mundial sostenido, se afianza un ordenamiento —establecido en la llamada «división internacional del trabajo y del comercio»— donde la misión tercermundista sería —dada la supuesta existencia de ciertas «ventajas comparativas»— el de suministrar materias primas cada vez más devaluadas y absorber el desecho tecnológico y los superávits productivos de las naciones superindustrializadas.

En suma, sin deseo de dramatizar pero siendo objetivos, vemos que, envuelto en una fraseología que presume libertad comercial absoluta, competitividad equitativa y cambio de patrones estructurales, se esconde el mismo dirigismo económico de siempre impuesto por las potencias mundiales en una continuidad de los conocidos esquemas neocoloniales.

Ante tal determinismo, aunque parece haber consenso en el país en aceptar la economía de mercado como necesaria —frente al fracaso de un estatismo mal interpretado— también existe cierta desconfianza hacia ese paradigma económico que se intenta imponer, cuyos móviles, además de oscuros, han sido incapaces de promover un avance social integral. Comenzamos a sospechar, por esas evidencias, que el problema fundamental del Tercer Mundo no es tanto la adopción de tal o cual modelo económico



interno, sino principalmente, la existencia de una distribución mundial de fuerzas mal equilibrada, en la cual estamos encasillados en constante desventaja.

Aunque, como reconoce ahora la propia CEPAL (Comisión Económica para América Latina), las posibilidades de romper este fatalismo parecen remotas, (6) comienzan a gestarse en el país algunas alternativas al modelo prevaleciente. Algunas de ellas, surgidas de grupos universitarios, (7) bajo la consigna de «ni estatismo ni individualismo», proponen salidas alternas donde se rescate la fuerza productiva de las comunidades autogestionarias así como el valor de las tecnologías populares y de la economía informal. En otra dimensión geográfica, los chinos proponen sorpresivamente una economía de mercado socialista, mientras que las elecciones en Polonia y Letonia llevan de nuevo al poder a los ex-comunistas.

Frente a tal panorama de dudas y tanteos, donde la ausencia de convicciones absolutas es, precisamente, el tono predominante, la universidad trata de reordenar su ruta dentro de una sociedad que también intenta encontrarse a sí misma. Una vez más la institución enfrenta el dilema de tener que readaptar sus objetivos a un modelo de desarrollo en evolución cuya esencia está siendo cuestionada.

### **III. TENDENCIAS ECONÓMICAS Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Ante los parámetros económicos y sociales que presenta la coyuntura mundial y nacional, unidos a las presiones financieras —producto de las mismas políticas neoliberales— a que está sometida actualmente la Universidad, es evidente que la institución experimentará serias dificultades para readaptarse a tal realidad.

La Universidad, como servicio social y motor de progreso, es una entidad generadora de análisis constante y de crítica social, pero, coetáneamente, debe convivir con el statu quo al que tiene que alimentar con su producto en conocimientos y en recursos humanos. A diferencia de otras instituciones perfectamente acopladas con los designios del Estado, la Universidad, dentro de su relativa autonomía, asume esa dualidad de objetivos cuestionando la política oficialista pero sincronizando su esfuerzo con tales planes nacionales. Así, dentro de esa aparente contradicción, tuvo que ir funcionando con los lineamientos del llamado desarrollismo económico, propiciado en los años 70 en varios períodos gubernamentales, en tanto esas políticas eran adversas en las aulas universitarias donde predominaba el mensaje marxista.

En esta relación academia-sociedad —siempre tan criticada— se ha denunciado constantemente que el desarrollo de las universidades ha estado más vinculado al sistema político e ideológico que al productivo. Percepción que no es totalmente convincente, si consideramos que —especialmente desde esa década señalada de los 70— ha venido realizando un esfuerzo sostenido por incorporar el producto universitario al aparato económico.

El camino elegido para ello en aquel entonces —en el cual se persiste hoy día— fue el de dar prioridad a las formaciones vinculadas al sector moderno de la economía, especialmente a las ingenierías, tecnologías, y a las carreras administrativas y gerenciales de avanzada. Dentro de esa línea preferencial, entre 1970 y 1980 la matrícula relativa al área científica-tecnológica llegó a duplicarse, tanto a nivel de Latinoamérica como al de Venezuela, y actualmente ocupa más de la cuarta parte del total de las universidades. (8)

Este intento de acercamiento de la universidad al mundo de la producción (como se aprecia en el Cuadro N° 1), ante la inmovilidad de las estructuras económicas, produjo una disfunción por

exceso —y no por defecto, como suele señalarse—. Dentro de ese fallido proceso de industrialización, la sobreoferta de recursos humanos vinculados al sector secundario (industrial), condujo a una traslación de esos profesionales al sector servicios (comercio, finanzas en general, educación, comunicaciones, etc.) especialmente en el empleo generado por el gobierno, que sigue siendo un refugio ideal. (9) Al respecto, como se observa en el siguiente cuadro, el porcentaje de profesionales universitarios absorbidos por este sector terciario de la economía pasa del 67,4, en 1961 al 78,7% en 1981, manteniéndose actualmente en esta última proporción.

### Cuadro N° 1

#### Desvinculación de la formación de recursos humanos universitarios (Egresados) con la demanda del mercado de trabajo. Venezuela (1961-1981) (en porcentajes)

OFERTAS DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSITARIOS AGRUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS	UBICACIÓN REAL DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL MERCADO DE TRABAJO			
	1958	1980	1961	1981
Sectores (#)				
Primario	-	4,2	11,4	4,5
Secundario	17,8	28,8	18,2	16,7
Terciario	63,6	65,4	67,4	78,7

(#) Sectores: Primario (Agricultura, ganadería, pesca, minería); Secundario (Industrias manufactureras, construcción, electricidad, gas y agua); Terciario (transportes, comunicaciones, comercio, finanzas y servicios en general).

Fuentes:                   Elaboración propia, según datos de:  
Encuesta de hogares, Resumen Nacional, 2º Sem.  
1981, y  
Censos Nacionales de población, 1961-1971, OCEI.  
CENDES, Cuadernos, Nº 2 y Nº 3.  
CNU-OPSU, Boletines Estadísticos, Nº 5 y Nº 10  
UNESCO, Anuario Estadístico, 1983, pp. II-300-348.

Ante la ausencia de un plan maestro orientador, nacional o regional, los establecimientos de educación superior y sus matrículas se multiplicaron, bajo el falso supuesto de que el solo hecho de formar recursos humanos vinculados al área científica-tecnológica era suficiente para impulsar la economía y, especialmente, para propiciar la industrialización del país.

Tratando de comprender tanto el fracaso de las políticas desarrollistas como el débil impacto causado por la expansión universitaria, numerosos estudios han venido analizando las razones de la contracción económica de los años 80 así como su coletazo en los 90. Sobre ello se ha señalado, entre otros argumentos, que el intento de industrialización tardía en Latinoamérica — con respecto a los países centrales— basada en la estrategia de sustitución de importaciones amparada por el Estado, condujo a la incorporación de tecnologías desarrolladas en contextos muy distintos al nacional, donde la dotación de recursos y la dimensión de los mercados eran de muy diferente magnitud. Este proceso de importación tecnológica —controlada por las multinacionales— aparte de la escasa incorporación de mano de obra, acentuó más las diferencias entre el núcleo del sector productivo moderno y un importante contingente, excluido del mismo, formado por la economía tradicional y las actividades informales.

Esta escasa capacidad de arrastre del sector moderno —que también se constata hoy día— dio lugar a un exceso de mano de obra relativa a este sector avanzado de la economía, que ha ido engrosando tanto la economía informal —componente permanen-

te del desarrollo capitalista periférico— como el sector servicios — fenómeno también típico de «terciarización» en Latino América.

El divorcio entre los recursos humanos universitarios y las estructuras productivas parecía inevitable dado el estancamiento económico del país. Sin embargo, ello no era una sorpresa. Ya diversos estudios sobre las necesidades de recursos humanos (entre ellos, el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho) (10) habían advertido a las autoridades educativas sobre la posible sobresaturación de profesionales, especialmente en el área de las ingenierías.

Ahondando más en las razones de la crisis del país, la mayoría de analistas han atribuido el fracaso económico a las políticas proteccionistas implantadas por los sucesivos gobiernos hasta 1989. Pero esta tesis, aunque con cierta dosis de veracidad, no parece totalmente convincente a la luz de la situación actual de persistente crisis. Cuatro años de virage neoliberal (inicio de la privatización, supresión de subsidios agrícolas e industriales, apertura comercial, aumento de las tarifas de los servicios, liberación de precios, etc.) habrían sido suficientes para mostrar un cambio substancial. Sin embargo, las actuales estructuras económicas muestran que el esquema neoliberal adoptado, adolece de igual incapacidad que el modelo desarrollista tanto para impulsar áreas productivas distintas a las tradicionales —que permitan la diversificación de las exportaciones— como para propiciar un desarrollo más integral y equitativo. (11)

Todo ello pareciera indicar, en forma muy global, que las variantes introducidas en estos últimos años por el «paquete económico» han producido en la práctica pocas transformaciones en las estructuras productivas básicas, así como en el mercado laboral. Salvo cierto incremento en la demanda de recursos humanos generada por el sector servicios —especialmente por las

empresas bancarias y financieras en general, por el comercio vinculado a las multinacionales y por el turismo— y de algunas solicitudes que parten de la reactivación de la industria petroquímica —especialmente en ingenieros químicos— (12) el mercado empleador sigue siendo, en líneas generales, similar al de la época del proteccionismo estatal.

Aunque algunos índices relativos a este último cuatrienio muestran un crecimiento económico interanual, lo cierto es que el proyecto neoliberal no ha logrado liberar al país de su postración estructural de subdesarrollo endémico (monoproducción, vulnerabilidad económica, dependencia, desigualdad social). Por lo que la Universidad sigue enfrentándose a una problemática social y económica fundamentalmente similar a la de las etapas anteriores, aunque ahora enmarcada por un distinto esquema ideológico y agravada por el déficit fiscal.

Valgan las anteriores reflexiones para mostrar que las relaciones entre las universidades y el mundo de la producción adquieren en Venezuela unas dimensiones distintas a las que pudieran mediar en un país industrializado. El riesgo de una excesiva funcionalización de la Universidad con los esquemas liberales más radicales —denunciado en otros países— (13) no parece ser totalmente válido en Venezuela donde los múltiples factores de incertidumbre (oscilaciones políticas y económicas, inestabilidad en los planes de desarrollo, decisiones improvisadas, etc.) impiden la elaboración de estudios predictivos fiables acerca de las necesidades de recursos humanos.

Como ejemplo de estas dificultades en la previsión de recursos y de prioridades, bastaría con mencionar la tradicional inoperancia puesta de manifiesto en los Planes de la Nación de Cordiplan —cuyo cumplimiento y logros jamás se evalúan— o en los Planes Nacionales para la Ciencia y la Tecnología, calificados, en su primera versión, por sus propios autores, como «planificación ilusoria», (14) y que ahora tienden a ser más flexibles y realistas.

Desgraciadamente, como muestra la historia reciente de Latinoamérica, el subdesarrollo es esquivo a los constantes esfuerzos de planificar el devenir económico y social. Por ello, los paradigmas que proponían un planeamiento excesivamente normativo y compulsivo —propios de los países industrializados— en un proceso de cuestionamiento y revisión están siendo suplantados por modelos flexibles, de carácter estratégico, como alternativa más viable. Esta tendencia ha tomado ya un lugar importante en nuestras casas de estudios superiores.

Lo expuesto anteriormente muestra, en resumen, que la adecuación del esfuerzo universitario a las demandas socio-económicas —especialmente en cuanto a los recursos humanos a formar—, dada la impredecible realidad y las cambiantes condiciones políticas y económicas, presenta difíciles obstáculos a salvar en el país. Aunque la planificación —como instrumento que racionaliza las actividades en función de ciertos objetivos— es un arma orientadora de gran valor, es probable que la intuición y el sentido común sigan imponiéndose a las proyecciones estadísticas y a otras técnicas probabilísticas.

Por supuesto, el problema de formación de recursos humanos a nivel superior no sólo atañe al conocimiento y prevención de la demanda social y económica en educación. Muchos otros aspectos, como el de los diseños curriculares, están involucrados en el problema.

La rapidez con que se produce el conocimiento científico-técnico y la dificultad de incorporarlo a los planes de estudio con igual celeridad, obliga a las universidades a diseñar modelos de formación profesional adaptables a tales cambios y que, al mismo tiempo, respondan a las especificidades del entorno propio. Lo cual plantea el tradicional dilema, entre dar prioridad a la especialidad o, por el contrario, a una formación generalista donde predomina lo formativo y lo metodológico.

Ambos enfoques curriculares tienen sus pros y contras. Así, la idea debe dar preferencia a la formación básica, instrumental, inspirada en un desarrollo general del individuo (enseñar a aprender, ayudar a pensar, saber cómo aprender, cómo anticipar el futuro, etc. etc.), aunque muestra una concepción seductora de la educación, enfrenta serias limitaciones en el desenvolvimiento profesional. Entre ellas, las dificultades que podría encarar el generalista para ubicarse rápidamente en el mercado laboral, a diferencia de aquel que posee una formación en conocimientos específicos.

La búsqueda de perfiles profesionales óptimamente equilibrados entre especificidad, formación de base y adecuación al medio, es una de las difíciles tareas que enfrenta la institución, ante la cual ha tomado cuerpo el concepto de educación continua, hacia una capacitación del profesional lo suficientemente amplia y flexible como para adaptarse a un constante reciclaje.

Sintetizando la reflexión acerca de los recursos humanos, se diría que nos encontramos frente a un panorama nacional impreciso y cambiante, y a un Subsistema de Educación Superior (o Subsistema Universitario, como quiera llamárselo) sobredimensionado —en cuanto a la demanda real del país— y caótico —en cuanto las interrelaciones de los establecimientos que lo componen—, ante lo cual las instituciones universitarias deben reordenar sus miras académicas y racionalizar su esfuerzo.

Ello involucraría, a mi juicio, como aspectos fundamentales: diseñar una auténtica estrategia de regionalización y de descentralización educativa superior —que ya está en marcha a nivel oficial—; hacer mayor énfasis en las actividades de investigación que relegue definitivamente la tendencia profesionalizante—; y una profundización en las relaciones de la Universidad con los sectores productivos —tanto formales como informales— así como con la sociedad en general —lo cual parece haberse ya asumido en algunas universidades.



#### **IV. DE LA UNIVERSIDAD PROFESIONALIZANTE A LA UNIVERSIDAD INVESTIGADORA**

Pese a esa manifiesta desarticulación entre la enseñanza superior y la estructura ocupacional, que ya analizamos, no todo fue negativo en esa expansión educativa y en el intento industrializador de las recientes décadas. Aun dentro de los conocidos errores y de las corruptelas realizadas al amparo de los gobiernos de turno, las tan criticadas políticas populistas y proteccionistas promovieron un parque industrial de considerables dimensiones —que hoy se está destruyendo por la indiscriminada política de apertura de importaciones— y se estableció una vasta infraestructura universitaria cuyas dimensiones bien pueden ser reorientadas y ajustadas a las nuevas realidades del país, dentro de una mayor pertinencia social y económica.

Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente humano, el mero hecho de haber transmitido tantos conocimientos a varios millones de personas —aunque muchas de ellas no llegasen a culminar sus carreras— y de haber despertado distintas inquietudes en la población, son hechos que justifican la inversión realizada en las universidades, pese a su escasa incidencia en el progreso económico.

Igualmente, el balance de cerca de treinta años de auge universitario, nos permite extraer muchas enseñanzas para el futuro. Entre otras, la necesidad de ser más cautos y realistas en nuestras miras y propósitos, tanto en lo económico como en lo educativo. Los proyectos faraónicos de los años 70 no han demostrado, precisamente, ser los más adecuados para las dimensiones y necesidades del país.

Por supuesto, este reajuste universitario no se dirige únicamente a los aspectos cuantitativos, sino a una reorientación integral. Es evidente que los esfuerzos que se vienen realizando

desde los años 80 por parte del CNU y de las propias universidades para estabilizar el crecimiento de la educación superior (prueba de aptitud académica, determinación de cupos, aplicación de pruebas de admisión específicas en cada Facultad, propedeúticos, y otras modalidades) están dando los resultados esperados al estabilizar el crecimiento de las matrículas. (15) Pero, lamentablemente, hasta ahora, este freno ha obedecido más a razones de carácter financiero-administrativo que a motivaciones académicas fruto de una reestructuración consciente de planes, carreras y necesidades.

Ciertamente que las actuales presiones económicas a que está sometida la Universidad, así como el inseguro destino de los egresados, nos imponen una política de ajuste matricular y de búsqueda de otras fuentes de financiamiento distintas a las tradicionales. Pero, más allá de lo cuantitativo, el reordenamiento institucional debe partir de unas claras premisas que van, desde el afianzamiento de la idea de regionalización—dentro del concepto general de descentralización— hasta la reorientación de los objetivos docentes y de investigación (tipos de carreras y de postgrados ofrecidos, planes de formación, contenidos, etc.)

Todo ello implica, además de un tratamiento diferencial al estudiante de la región específica, el desarrollo de políticas y proyectos acordes a las prioridades del entorno, así como un autofinanciamiento involucrado necesariamente en actividades de investigación. Lo cual no significa, obviamente, que olvidemos la globalidad nacional y la universalidad del conocimiento.

Esta concepción descentralizadora de la Educación Superior—acorde a las actuales tendencias nacionales e internacionales—no es nueva en el país. Además de la regionalización en los niveles básico y medio, ya en la Reunión de Vicerrectores Académicos, realizada por el CNU en 1976 en San Cristóbal, se discutió y aprobó la creación de Subsistemas Regionales de Educación Superior que, por diversas razones, no funcionaron en la práctica. (6)

Sin embargo, diversas experiencias descentralizadoras muestran que la idea de regionalización produce muchas resistencias y equívocos. En el caso de la Universidad, si se ahonda tal política, probablemente suscitará graves problemas cuya solución estará sujeta a una sinceración por parte de los distintos actores universitarios, así como a la necesidad de deponer muchos intereses creados existentes en ciertas Facultades y Escuelas. El sólo hecho de tener que reducir o eliminar algunas carreras donde la sobreoferta sea muy evidente o reñida con las necesidades y demandas de la región específica, representa ya un elemento conflictivo de difícil aceptación.

Dentro de esa idea matriz de racionalización del esfuerzo educativo nacional, tal redimensionamiento debe acompañarse con una política preferencial hacia la actividad investigativa, lo cual parece ser ya una marcada tendencia en muchas universidades del país. La saturación del mercado laboral de egresados universitarios, y el limitado éxito que ha mostrado hasta ahora el modelo de universidad profesionalizante —que copiamos de la napoleónica— nos obliga a un reordenamiento institucional donde los principales objetivos se dirijan hacia el universo de la investigación científica, tecnológica y humanística. Lo cual involucra un impulso especial hacia los institutos, centros y grupos de investigación, y hacia la instauración preferencial de postgrados y de tutorías que confluyan hacia ese fin.

Obviamente, el establecimiento de una política de apoyo a la investigación como misión prioritaria presenta, especialmente en un país tercermundista, difíciles problemas teóricos y prácticos cuya solución no depende exclusivamente de las universidades sino de su interrelación armónica con los sectores gubernamentales y productivos.

Uno de los dilemas más relevantes, característico de los países en desarrollo, se presenta ante la necesidad de propiciar y

de armonizar una investigación de alta calidad —que implica serias exigencias y requisitos para su cumplimiento— con la urgencia de formar investigadores a cómo dé lugar.

Al respecto, se ha aceptado en diversos foros internacionales convocados por la UNESCO (17) que ya América Latina posee suficientes recursos humanos a nivel superior (Venezuela alrededor de un millón de egresados), pero, contradictoriamente, también se señala que escasamente un 10 por ciento de éstos tiene capacidad real para la investigación (según el CONICIT, en el país sólo existen unos 800 investigadores registrados como tales).

Ante esta realidad, el problema entre calidad y cantidad parece insoluble. Como dice la propia UNESCO, la excelencia por la excelencia carece de sentido en ese contexto si no se plantea en función de objetivos bien definidos y con proyección social. Propiciar un excesivo elitismo —en nombre de la calidad— podría conducir a la creación de un círculo muy reducido de investigadores de excelencia, pero de dudoso impacto en el desarrollo del país.

Por otro lado, proponer una política de impulso a la investigación excesivamente selectiva, podría suponer más aspectos negativos que positivos, ya que cercenaría las motivaciones y oportunidades de aprendizaje de muchos docentes que desean investigar sin poseer la formación adecuada para ello. Frente a esa manifiesta escasez de producción y de productores de nuevos conocimientos, no sólo debería promoverse aquella investigación respaldada por investigadores «consagrados» o por sólidos proyectos, sino también apoyar la actividad investigativa por sí misma, como medio para la formación de especialistas. Es decir, impulsar una estrategia más abierta que permita «aprender a investigar investigando», como equivalente al conocido principio pedagógico de «aprender haciendo». Quizás el sólo hecho de formar profesionales diestros en esta actividad de pesquisa, justificaría por sí mismo la inversión económica y el esfuerzo realizado, aunque los

frutos de la investigación efectuada no se palpasen en forma inmediata.

Aparte del dilema cantidad-calidad, otros muchos problemas se plantean al proyectar una universidad fundamentalmente sustentada en la investigación, algunos de ellos de carácter universal, y otros más específicos propios de los países en vías de desarrollo donde esta actividad aún no está bien sedimentada. Entre ellos: ¿cómo establecer una relación efectiva con el sector productivo? ¿cómo armonizar la libertad individual del investigador —muy defendida en la concepción neoliberal— con la necesidad de estudiar las áreas prioritarias en el país? ¿es conveniente —tal como preconizan Mayz Vallenilla y otros— separar la investigación de la docencia? ¿son realmente productivas las políticas «fomentistas» ante la escasez de investigadores acreditados?

Aunque no existen respuestas definitivas sobre estos planteamientos, sí parece haber consenso en que la búsqueda de nuevos conocimientos y la recreación de otros —que define a la investigación— es la única alternativa posible que podría sacar a la institución y al país del actual estancamiento.

Tampoco debemos engañarnos en cuanto a los resultados inmediatos de este viraje en los objetivos universitarios. Sabemos que cualquier estrategia educativa o de fomento de la investigación, por buenas que sean aisladamente, no son garantía de un aporte efectivo al desarrollo del país, frente a la ausencia de otros cambios profundos y adecuados en el campo político y económico. Aunque en forma muy simple y esquemática, el conocido triángulo de Sábato — como modelo explicativo del desarrollo— muestra la necesaria interrelación entre la infraestructura científica, las políticas del gobierno y el sector productivo, para que puedan darse las condiciones mínimas de progreso económico y social.

## V. LA UNIVERSIDAD FRENTE A LAS TENDENCIAS PRIVATIZADORAS Y DE AUTOFINANCIAMIENTO

Otro de los caminos fijados a la Universidad, es su paulatina conversión en un ente privado. Aunque en este momento no se plantea frontalmente la privatización universitaria como política oficial, existe una estrategia global —inmersa en las propuestas neoliberales extremas— que parece ir estrangulando lentamente a estas instituciones, hasta reducirlas a su mínima expresión.

Pretendiendo medir con el mismo rasero tanto a las empresas que fabrican salchichas como aquellas que producen conocimientos y forman profesionales —cuyo beneficio sólo puede medirse a muy largo plazo— se han venido esgrimiendo muchos argumentos en contra de la enseñanza superior pública, algunos de ellos alejados de la verdad. Escasa productividad, altos costos de financiamiento y una administración ineficaz, son algunas de las críticas que se hacen a las universidades, aplicándoles criterios de evaluación similares a los utilizados para promover la privatización de otras empresas estatales.

Los caminos para desestatizar los establecimientos de enseñanza superior no son, por lo tanto, a través del simple decreto oficial —ya que ello implicaría un alto riesgo político y social para cualquier gobierno que lo intentare— sino por medio de una serie de medidas que han llevado a las universidades a mermar sus matrículas y su campo de acción, así como a buscar nuevas vías de autofinanciamiento. Esta discreta pero efectiva estrategia oficial se caracteriza por: el aumento de las restricciones presupuestarias, el apoyo indiscriminado a las universidades privadas, la divulgación machacona de la ideología mercantilista, y otras medidas similares que han ido haciendo mella en el sector educativo público.

Sin embargo, la tendencia privatizadora en la enseñanza

postsecundaria no es un hecho nuevo en Venezuela, aunque tiene un origen más reciente que en la mayoría de países latinoamericanos con larga trayectoria en este camino. Arropada en la influencia de las teorías economicistas de la educación de los años 60, se inicia en el país en 1953 con la fundación de la Universidad Católica Andrés Bello, y en la actualidad existen ya más de 46 establecimientos privados (15 universidades y 31 institutos superiores de diversa índole). (18) Pese a tan fuerte avance, el peso de la matrícula privada aún no alcanza el 30 por ciento del total nacional. El poco prestigio de que han gozado hasta ahora la mayor parte de estas instituciones, aunado a la poca diversificación de las carreras ofrecidas y a la escasa productividad investigativa, han obrado en su contra.

La larga tradición del Estado Docente que ha predominado en la historia de Venezuela, bajo la influencia hispana y latina en general, también ha sido un factor decisivo en el desenvolvimiento de esta tendencia privatizadora, cuyas motivaciones han sido diversas: reacción defensiva de la Iglesia Católica frente al laicismo, divulgación religiosa, intereses empresariales vinculados a la formación de recursos humanos específicos —como el caso de la Universidad Metropolitana—, el deseo de despolitizar las universidades por parte de ciertos gobiernos, o, simplemente, razones de lucro mercantil.

Sin embargo, como se dijo, el empeño privatizador responde actualmente a una política global enmarcada en el neoliberalismo, que sin atacar abiertamente la autarquía y la autonomía universitaria, está llevando a la institución a cerrar sus puertas progresivamente y a buscar nuevas formas de financiamiento en ocasiones impropias a la esencia universitaria.

Aunque en la actualidad se observa una cierta tregua en la acción privatizadora del Estado —después del agresivo impulso inicial del 89— es muy probable que cuando se agoten las propie-

dades oficiales más vulnerables —en dos o tres años— se enfilarán las baterías hacia los servicios educativos, especialmente, hacia las universidades autónomas.

Bajo esta presión, la universidad, sin tener mucha claridad del porqué, está afanada buscando ingresos, a veces irrisorios, en un país donde, paradójicamente, el 80 por ciento del Presupuesto Nacional depende de las regalías generadas por una empresa estatal.

Dentro de ese espíritu de búsqueda de una autarquía ilusoria, se están generando múltiples y variadas actividades extracátedra, entre ellas: prestación de servicios a empresas privadas o públicas (proyectos diversos, investigaciones, asesoramiento técnico, etc.); instauración de empresas propias dirigidas a la comercialización de ciertos bienes (medicinas, cosméticos, alimentos, viviendas prefabricadas, bebidas, explotación agrícola, pecuaria o maderera, etc.); y en actividades de extensión (postgrados, seminarios, cursos de actualización, conferencias y otras).

Estas actividades destinadas a generar ingresos, aunque positivas al vincular a las universidades con el ámbito del trabajo y de la economía, estarán acordes a los objetivos institucionales en la medida en que se involucren con los procesos de investigación, o en que originen nuevas tecnologías y conocimientos aplicados o básicos. Por el contrario, el abordar proyectos comerciales sujetos a una obligada ganancia pero ausentes de investigación, distraería peligrosamente el esfuerzo académico hacia campos ajenos a la institución.

Sobre este riesgo, ya algunos científicos en el país han denunciado las presiones a que están siendo sometidos en su trabajo y el peligro que puede entrañar esta tendencia para una labor verdaderamente autónoma y académica. (19)



Convendría recordar al respecto, que las actividades de investigación y desarrollo (I.D) son universalmente consideradas como centros de inversión y costos, y no como fuente de beneficio aislado en el corto plazo, ya que sólo se hacen rentables en un contexto ampliado e integrado al sector industrial o empresarial. Por ello, ni en los países industrializados donde predomina tradicionalmente el sector privado en la economía, se ha abandonado el apoyo financiero a la educación y a la generación de ciencia y tecnología. Hoy día, en estos países, el aporte estatal a la investigación y desarrollo sobrepasa el 3 por ciento de su producto territorial bruto.

Las vías de autofinanciamiento, aunque positivas en sus propósitos, también tienen, pues, algunos riesgos, como sería aceptar proyectos comerciales que, por su interés inmediato de lucro, podrían desvirtuar sus misiones. Además, la magnitud de los presupuestos universitarios —que en las autónomas rondan los 10.000 millones de bolívares— muestra la imposibilidad de cubrirlos con las actividades extracátedra.

Una vez más, las tendencias universitarias parecen obedecer a dictámenes y a modelos foráneos. Por ello se argumenta la superioridad y la eficiencia de las instituciones superiores norteamericanas como camino a seguir en Venezuela y, paradójicamente, se ignora el ejemplo de otras universidades, como la mayor parte de las europeas, que siendo públicas han mostrado igualmente ser muy exitosas.

Sería, además, absurdo pretender crear, de la noche a la mañana, universidades con una elevada productividad, a imagen de las norteamericanas, que tienen siglos de tradición administrativa y organizativa de índole privada, y que forman parte integral de una sociedad imbuida en los valores más exacerbados del capitalismo.

En síntesis, pese a estas últimas consideraciones, las múlti-

ples presiones a que está sometida la universidad, sumadas al deseo manifiesto de los sucesivos gobiernos de deslastrarse de la carga económica que representa la educación, irán afectando progresivamente tanto su tamaño como su campo de acción. De acuerdo con esta tendencia, a fines de la presente década más de la mitad de la educación superior será de carácter privado.

## VI. LA UNIVERSIDAD HACIA EL SIGLO XXI

Aunque brevemente, en los capítulos anteriores se han expuesto algunas de las tendencias que —a mi juicio— se están afianzando en la educación universitaria como reacción a los cambios económicos y sociales, y en la búsqueda de salidas a ese estado de dubitación que nos aqueja como sociedad en crisis.

Esa evolución reciente parece reflejar el deseo institucional de alejarse de la tradicional imagen de «torre de marfil» y de acercarse más a la problemática social y del mundo del trabajo. Para ello, se están racionalizando sus dimensiones —dentro de la idea general de descentralización— y se intenta afianzar como prioritaria la función investigativa en oposición al decadente modelo de universidad profesionalizante. Este giro, además de acercarnos más a la posibilidad de un desarrollo integral en el país, redundará en un mejor equilibrio entre docencia e investigación. No obstante, los frutos se verán a muy largo plazo.

Es evidente, sin embargo, que en esas tendencias que apreciamos como predominantes y determinantes en su devenir, no participa toda la comunidad con iguales motivaciones. Por el contrario, buena parte de ella continúa sumergida en ese microambiente institucional, más administrativo que académico, ajeno al clamor de cambio y de apertura extramuros.

Un reciente sondeo de opinión realizado en la Universidad de Los Andes (20) muestra, precisamente, ese apego a los pequeños

problemas inmediatistas —financieros y grupales— y la ausencia de planteamientos de fondo sobre la pertinencia o no de las funciones universitarias, de sus estructuras, y hasta de la propia «idea de Universidad» —tal como plantean, entre otros, Mayz Vallenilla y Ramón Casanova. (21) Entre los 336 problemas planteados por la comunidad universitaria, solamente 15 de ellos (4%) fueron referidos a temas macroestructurales concernientes a las relaciones academia-sociedad (insuficiente orientación doctrinaria sobre los problemas nacionales y regionales, falta de definiciones doctrinas sobre las políticas y planes en cuanto a investigación y postgrado, etc.)

Pese a ese relativo vacío conceptual acerca de las misiones universitarias y a cierta indiferencia de algunos sectores universitarios frente a la necesidad de cambio, el reordenamiento institucional está ya en marcha y es posible que, ante las experiencias y los fracasos recientes, se mantengan unas vías de renovación más realistas y comedidas que las de antaño. La necesaria contemporaneidad de las enseñanzas universitarias —es decir, su adecuación a los tiempos— debe también estar en armonía con la especificidad histórica del país, de lo contrario, se caería en el mismo error del pasado reciente, al traspolar mecánicamente los problemas y las metas de los países industrializados.

Como dijimos, en un país como Venezuela donde conviven dos sociedades muy diferenciadas, y hasta dos distintos momentos históricos, las prioridades para el desarrollo no pueden equipararse a las del Primer Mundo. Recordemos al respecto, el error en que se incurrió en los años 70 cuando aceptamos la tesis generalizadora de Philips Coombs («La crisis mundial de la educación»), experto de la UNESCO, que pretendía falsamente meter a todos los países del orbe en una inexistente mundialización. Aunque ciertamente la globalización es hoy una realidad en cuanto a que dependemos cada vez más de las acciones y decisiones de otros países o bloques internacionales, ello no significa que los problemas a enfrentar sean comparables, así como tampoco la forma de solucionarlos.

Es cierto que muchos de los conocimientos que se imparten en las universidades latinoamericanas, como señala la UNESCO, (22) «se refieren más al pasado que al presente, más a la historia que al futuro», pero también es verdad que la región es, simultáneamente, mitad pasado mitad presente. Por ello, aunque existe una necesidad acuciante de desarrollos tecnológicos y de redes comunicacionales de avanzada para América Latina, pensamos igualmente en la marginalidad extrema de gran parte de la población, aún de las tecnologías más elementales, y en el analfabetismo endémico que la excluye del progreso. Aceptemos que la Universidad debe obligatoriamente adelantarse al futuro, pero también que no puede perder de vista la contradictoria realidad nacional.

La tentación de seguir los modelos económicos y educativos de los países industrializados es muy poderosa. Pero también sería interesante acudir al ejemplo de otros paradigmas de desarrollo menos conocidos, aunque han demostrado ser social y ecológicamente más exitosos. Uno de ellos, el de Dinamarca, muestra a un país, con uno de los niveles de vida más altos del mundo, que se ha proyectado universalmente sólo por sus quesos, su mantequilla y los famosos cuentos de Andersen. Ello demuestra, entre otras cosas, que el anhelado progreso y la calidad de vida no pueden concebirse únicamente a través de la robotización o de las altas tecnologías.

Estas posibles vías alternas al desarrollo, parece que también están ya calando en muchos sectores académicos del país. Entre otros, Maza Zabala, Armando Córdoba y Francisco Mieres (23) nos hablan de la necesidad de abrir el camino a los pequeños productores, a las comunidades, y a los sectores informales hoy marginados, en la búsqueda de distintas modalidades de asociaciones económicas participativas donde, por sus dimensiones y características, no se precise de tecnologías excesivamente sofisticadas. Al respecto, no es casual que la única zona del país que ha mostrado, pese a la crisis, un notable crecimiento

agropecuario, haya sido la Región Andina, donde sobrevive el tipo de economía agraria tradicional. (24)

Pero estas nuevas tendencias y búsquedas, aunque promisoras, están únicamente en la fase de formación conceptual, en la cual la Universidad debe necesariamente involucrarse, y quizá sea éste el momento oportuno para ello.

En efecto, aunque la institución está constantemente comprometida en una lucha por mejores presupuestos, también es cierto que —como contrapartida favorable— ha habido un descenso en las presiones estudiantiles por acceder a las universidades autónomas. Diversos factores entre ellos, las trabas administrativas para el ingreso y la penetración ideológica privatizadora— han obrado en favor de esa disminución en la demanda social en educación superior. También es evidente, que los actuales movimientos estudiantiles lucen desarticulados y ausentes de miras, a diferencia de las pujantes luchas renovadoras de las pasadas décadas, y que el derecho constitucional de “acceso a la educación” ha sido suplantado por otros principios —al parecer, ahora más válidos, aunque dudosamente aplicados en la práctica— de selectividad, competitividad y meritocracia.

Esta tregua, aunque cuestionable en muchos aspectos, podría ser aprovechable por la comunidad universitaria para reflexionar sobre su destino y elaborar nuevos diseños para el cambio. Tenemos casi la certeza que muchos de los problemas planteados acerca de la edificación de una Universidad más democrática, más eficiente y mejor vinculada al país, no tienen una respuesta inmediata. Numerosos estudios han demostrado hasta la saciedad la imposibilidad de lograr una igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y, otros, que la «calidad total» a la que se aspira en la Universidad, debe empezarse en los hogares para que pueda llegar a las instituciones educativas o a las empresas. La influencia de los determinantes sociales y económicos sigue siendo demasiado potente para ser neutralizada desde la academia.

Pese a esa visión poco esperanzadora, debemos seguir buscando, aunque lentamente, una nueva imagen institucional y distintos caminos para el desarrollo.

## REFERENCIAS

- (1) Numerosas publicaciones aluden a ese estado de incertitud que caracteriza a la sociedad al finalizar la presente centuria. Al respecto, V. Vernú hace una síntesis bibliográfica en: «Thierry Breton con anuncios de postrimerías: el final de las ilusiones o tendencias de fin de siglo», **El País** 01-01-93.
- (2) Arturo Uslar Pietri: «El gran desconcierto», en **El Nacional**, Caracas, 31-01-93.
- (3) A. Lombardi: «Tiempos de incertidumbre», en **El Nacional**, 20-03-93.
- (4) Diversos indicadores muestran la depresión, de estos sectores económicos. Según la Encuesta Coyuntura de Conindustria (marzo '93) durante el año 1992 ha habido una sensible baja en la producción industrial que se atribuye a las dificultades de financiamiento, a la caída de la demanda y a la falta de competitividad de la industria nacional. (**El Nacional**, 02-03-94). Esta tiende a agravarse en 1993 (encuesta Conindustria jul. '93) cuando la producción industrial registra una caída del 26,8% y una disminución de empleos en este sector de 36.190 puestos, que se teme llegue a la desaparición de 143.39~ cargos en los próximos 12 meses (**El Nacional**, 14-sep-93).
- (5) «Según el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo: un mundo de ricos y pobres», en **El Socialista**, Madrid, 14-sep-93, p. 4.
- (6) Ante el fracaso del modelo desarrollista, propuesto por la CEPAL en la década de los 70, y las dificultades que enfrenta la imposición del esquema neoliberal en América Latina, este organismo ha presentado una nueva alternativa para el desarrollo regional contenida en el estudio: «Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado». En este documento se plantea cómo lograr simultáneamente un crecimiento sostenible, ambientalmente sustentable, con mayor equidad y en democracia. Sin embargo la

- CEPAL reconoce que ese desarrollo luce casi inalcanzable. (Documento citado en: **El Nacional**, 22-03-92, A-4).
- (7) Entrevista al economista Francisco Mieres: «La propia sociedad puede ser protagonista de su liberación», en **Correo de Los Andes**, 29-03-93.
  - (8) Según informes de la UNESCO, en América Latina egresan anualmente cerca de 500.000 graduados universitarios, 20% de los cuales pertenecen al área de las ingenierías y de la tecnología. Este porcentaje es ligeramente superior en el caso de Venezuela (UNESCO, **Documento Base**, Caracas, 1991, p. 42)
  - (9) Según cifras oficiales (OCEI, **Encuesta por hogares**, 1992) el empleo gubernamental absorbe cerca del 20 por ciento de la fuerza de trabajo activa y esta proporción permanece casi invariable desde hace varias décadas sin que la nueva política de privatización haya podido modificar la situación.
  - (10) «Sobresaturación de ingenieros y otros especialistas se prevé para 1985, así lo revela un informe del MIT», en **El Universal**, 07-06-1979.
  - (11) Según datos del Banco Central de Venezuela, en 119 millones de dólares disminuyeron las exportaciones no tradicionales en 1992. (**El Nacional**, 18-0-92).
  - (12) «Ingenieros químicos tienen amplia participación en apertura económica», en **El Nacional**, 05-05-93.
  - (13) El peligro a que se exponen las universidades por una excesiva funcionalización con los modelos neoliberales en su expresión más extrema, ha sido denunciado y analizado en algunos trabajos de investigación, entre ellos: Miguel Escotet, «Visión de la Universidad del Siglo XXI», en **Trasiego**, Mérida, N° 2-3, 1981, p. 82-92.
  - (14) AVALOS, Ignacio: **La participación ilusoria**, Caracas, Monte Avila, 1978.
  - (15) Después de la explosión universitaria de los años 70, el crecimiento interanual de la matrícula de la Educación Superior ha ido desacelerándose gradualmente. De esta forma, después de alcanzar un crecimiento máximo del 22,% interanual en el período 1970-75, la matrícula ha ido decreciendo hasta mostrar casi un estancamiento. Por ejemplo, entre 1990 y 1991 el aumento fue sólo del 2,5% (fuentes: Ministerio de Educación, **Memoria y cuenta**, 1991, p. 683).

- (16) Consejo Nacional de Universidades. **Proyecto general de discusión de políticas para el desarrollo de la educación superior venezolana.** San Cristóbal, sep. 1976.
- (17) UNESCO: **Reflexiones sobre los roles de la Educación Superior. El caso de América Latina y el Caribe, Documento Base,** Caracas, 1991, p. 41.
- (18) Según datos del Ministerio de Educación, para fines de 1992 existían en el país 107 establecimientos de enseñanza superior: 24 universidades nacionales, 15 universidades privadas, 1 Instituto U. Pedagógico privado, 4 Institutos Universitarios Politécnicos Nacionales, 23 Institutos Universitarios de Tecnología Nacionales, 24 Institutos U. de Tecnología Privados, 6 Colegios Universitarios Nacionales, 6 Colegios Universitarios Privados y 4 Institutos Universitarios Militares (**Memoria y Cuenta, 1992,** pp. 685-686).
- (19) «Autofinanciamiento presiona a los Centros de Investigación», en **El Nacional,** 24-11-1992.
- (20) S. Muños Lagos: **Análisis y evaluación de los problemas de la ULA, identificados en las entrevistas sostenidas por el Rector,** PLANDES, Mérida, 03-nov., 1992.
- (21) Para una discusión más extensa sobre este tema, véase: E. Mayz Vallenilla, **El ocaso de las universidades,** Caracas, Monte Avila, 1982. Y: Ramón Casanova; «La crisis de la idea de Universidad», en **Cuadernos del CENDES,** Caracas, sep-dic., 1989.
- (22) UNESCO, obra cit, p. 265.
- (23) «Expertos buscan vías hacia un nuevo modelo económico», en **El Nacional,** 10-06-1993.
- (24) Según el Presidente de Fedegro, mientras la agricultura en el país decrece en un 10 por ciento durante el primer semestre de 1993, el desarrollo agropecuario va en ascenso en Mérida, con un crecimiento acumulado del 22,57% en el período 1989-1992, con lo cual ha desplazado tanto al sector público como a la propia ULA como entes generadores de ingresos. (**El Nacional,** 16 jul. 93).